

...las fuerzas morales constituyen uno de los asuntos más importantes en la guerra. Son el espíritu que impregna toda la esfera de la guerra. Se adhieren más tarde o más temprano, y con afinidad mayor, a la voluntad que pone en movimiento y que guía a toda la masa de fuerzas y, por así decirlo, se confunden con ella en un todo, porque ella misma es una fuerza moral.

-Karl von Clausewitz

Jorge Alcocer

El desplome Financiero mexicano

1979-1982

EL AGOTAMIENTO DEL AUGE.

De 1978 a mediados de 1981, México vivió el periodo de crecimiento económico más acelerado del presente siglo. En ese lapso el producto interno bruto medido en términos reales casi se duplicó, gracias a un crecimiento promedio anual superior al 8 por ciento. Todavía en 1981, ya con la crisis de por medio, la economía mexicana pudo crecer a una tasa del 7.9 por ciento.¹ Los orígenes y el mecanismo de la expansión acelerada vivido en esos años han sido estudiados con amplitud.² La mayoría de los analistas de nuestra economía, pese a la diversidad de sus enfoques, coinciden en atribuir el origen de la expansión a un crecimiento importante del gasto público, sustentado en la afluencia de recursos externos provenientes de las ventas de petróleo crudo en el mercado internacional, y a partir de 1980 a los recursos provenientes del endeudamiento externo del Estado, que vinieron a sumarse a los cuantiosos recursos generados por el petróleo. La velocidad y la magnitud de la expansión económica están directamente ligadas a ese flujo externo de recursos que permitió soslayar los tradicionales desequilibrios de la economía mexicana, singularmente los desequilibrios externo y fiscal.

Ese acelerado crecimiento dio origen a nuevos problemas, al tiempo que magnificó otros ya existentes con anterioridad. Entre estos últimos cabe destacar la profundización de los desequilibrios inter e intrasectoriales atribuibles a la expansión petrolera. Así, el PIB de la industria petrolera, que en 1980 representó el 3.2% del PIB total, para 1982 había ascendido al 3.8%, mientras que la industria manufacturera en su conjunto disminuyó su participación dentro del PIB del 23% en 1980, al 20.8% en 1982. Más significativo aún es el hecho de que la industria manufacturera, tradicional soporte de

1 Todas las cifras se han obtenido del Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1981, 1982. SPP, México.

2 Véase al respecto *Economía Mexicana*, nos. 1 al 4, CIDE; Taller de Coyuntura de la DEP, Fac. de Economía, UNAM: 1979, *¿la crisis quedó atrás?*; y *Economía Petrolizada*, Taller de Coyuntura, 198L El diagnóstico gubernamental puede verse en *Criterios generales de política económica*, SPP, 1982

los ciclos expansivos, creciera por tres años consecutivos por debajo del ritmo del PIB. En 1981 el PIB creció 7.9%, mientras que la industria manufacturera lo hizo al 7% y para 1980 las cifras son del 8.3% y 7.2% respectivamente. Este cambio cuantitativo permite inferir un cambio de calidad de mayor significación:

a diferencia de ciclos expansivos anteriores, en los que la industria manufacturera jalaba al conjunto de la actividad económica, en el ciclo expansivo 1978-1981 esa industria acompañó la expansión generada por un nuevo sector, el petrolero, que se colocó en el centro de la dinámica económica. Aunado a lo anterior se observa una continuada disparidad intersectorial en los ritmos de crecimiento y bruscos cambios en los mismos de un año para otro en diversos sectores. Así, mientras que en 1980 la industria petrolera creció en 23.5%, las manufacturas en su conjunto crecieron en 7.4% y el transporte en 11.0 por ciento. Para el año siguiente, las cifras son del 16.5%, 7% y 10.7%, respectivamente. Tenemos así una dinámica económica caracterizada por las disparidades en los ritmos de crecimiento, por la formación de cuellos de botella y por rezagos importantes en sectores básicos que se mostraron incapaces de responder a las necesidades de los sectores más dinámicos; tales fueron los casos del transporte, de la industria de materiales para construcción, de la siderurgia y la metalurgia, y los rezagos estructurales en el sector agrícola y en la producción de bienes de capital.

Los desequilibrios sectoriales se reprodujeron, en ocasiones magnificados, dentro de cada sector. Especial mención merece la disparidad de ritmos de crecimiento en la industria manufacturera. En 1980, cinco ramas, de un total de nueve, crecieron por debajo del promedio. Así, mientras que la rama IX, otras industrias manufactureras, decreció en 1.9%, la II, textiles, prendas de vestir e industrias del cuero, creció en sólo 2.4% y la de productos alimenticios, bebidas y tabaco en 6 por ciento. En ese año, la rama más dinámica fue la de papel, productos de papel, imprentas y editoriales con una tasa de crecimiento del 11.2%, seguida de productos metálicos; maquinaria y equipo, que creció al 9.6 por ciento. En 1981, seis ramas crecieron por debajo del promedio de la industria manufacturera. Las ramas más dinámicas fueron la IX, que creció al 10.9%, y la de productos metálicos, maquinaria y equipo, con un 10.6 por ciento. Las tasas de crecimiento más bajas se dieron en madera y productos de la madera, 2.9%; industrias metálicas básicas, 3.5%, y papel, 4.4 por ciento. Se constata cómo dentro de la que antaño era la principal fuente de impulso económico fue imposible mantener un ritmo estable de crecimiento. Las ramas crecían de manera desigual y a saltos; a un año bueno

seguía otro de pérdida de dinamismo. El mismo fenómeno se observa dentro de cada rama, en las que las diferentes clases de actividad repetían el esquema desequilibrado del conjunto de la economía. Remitimos al lector interesado a la información directa contenida en la fuente ya citada.

Este esquema de expansión desequilibrado pudo sostenerse durante cuatro años gracias a la existencia de los cuantiosos recursos financieros provenientes del petróleo y la deuda externa, de forma tal que la insuficiencia de la oferta interna, fuese por deficiencias estructurales o por desadaptaciones coyunturales, se cubrió con importaciones, lo que relajó enormemente la disciplina en materia de gasto e inversión que hubiese sido necesaria para llevar adelante un programa que pusiera la expansión al servicio de la diversificación e integración de la planta industrial mexicana. Lo que predominó fue la improvisación y la ausencia de cualquier plan que vinculara las demandas y capacidad de oferta inter e intrasectoriales; cada sector, rama y empresa buscaba la mejor manera de satisfacer sus necesidades de demanda, lo que impidió cualquier programación de la expansión por el lado de la oferta. Se dieron así casos, de desajustes costosos, como la ampliación de la planta industrial productora de tubos para la industria petrolera, que cuando pudo iniciar operaciones se encontró con que el programa de PEMEX en esa materia se encontraba prácticamente concluido; sobre la base de importaciones masivas de tubería, y que los nuevos programas habían sido suspendidos.

Mucho se ha discutido en los años recientes sobre la "petrolización" de la economía mexicana; en favor y en contra se han manejado datos, hechos y tendencias. A nuestro juicio no cabe hablar de una "petrolización" de la economía mexicana tipo Irán, Iraq o algún otro país árabe, y tampoco estamos ante un fenómeno como el venezolano. Si observamos los grandes agregados macroeconómicos, podemos comprobar que el mayor peso cuantitativo del petróleo se reflejó en el sector externo y en los ingresos gubernamentales, pero medido por su contribución al PIB, o comparado con otros sectores, el peso del sector petrolero no fue algo fuera de lo normal para un país que se colocó como el quinto productor de crudo a nivel mundial. La petrolización no estuvo pues en el peso absoluto de los hidrocarburos en la formación del PIB, sino en el hecho de que los recursos que generaron, y siguen generando, con su venta al exterior, fueron la válvula de escape, el lubricante de una economía tradicionalmente restringida por su incapacidad exportadora, por su inagotable sed de importaciones y por unas finanzas estatales débiles. Junto a lo anterior, el sector petrolero se colocó como la bujía que

echó a andar a las ramas fundamentales de la industria manufacturera paralizadas por la crisis y el programa restrictivo de 1976-1977. Ramas como la siderurgia, la de equipo de transporte, la metalurgia, la construcción y otras pudieron iniciar su reactivación y crecer gracias al impulso generado por las cuantiosas inversiones estatales en la industria petrolera. Se generó así un efecto de encadenamiento y de multiplicación del efecto inversor. Finalmente, no menos importante fue el efecto del petróleo sobre las expectativas de la burguesía, la cual vio en esa riqueza una fuente inagotable de recursos en qué apoyar su proceso de acumulación; expectativas reforzadas con el discurso gubernamental, que a partir de 1978 no dejaría de hablar de la enorme riqueza que el petróleo representaba para México y que había llegado la hora de aprender a administrar. El petróleo se colocó así en los nudos fundamentales del proceso de acumulación; dio a la industria la dinámica de su crecimiento; proporcionó al Estado los recursos con qué financiar su gasto y sirvió de aval para obtener el crédito externo; suministró los recursos que financiaron las importaciones más cuantiosas de toda la historia de México; y cambió las expectativas de la burguesía, que se sirvió con amplitud de la riqueza petrolera para acrecentar sus riquezas y su poderío.

Ya hacia mediados de 1980 diversos indicadores apuntaban hacia el relajamiento del esquema de crecimiento seguido desde 1978. Por un lado, las presiones inflacionarias seguían agudizándose: en 1980 el índice de precios implícito del PIB creció en 28.7%, con lo cual las presiones sobre el tipo de cambio, amplificadas por la apertura drástica de nuestra economía al exterior, se hicieron más agudas. El gobierno reaccionó con la receta de 1975-1976: aumentó la tasa de interés y mantuvo la libre convertibilidad del peso con el argumento de que ésta era "una de las libertades básicas de los mexicanos".³

Por otro lado, los cuellos de botella en algunos sectores se hicieron sentir con mayor fuerza; en especial cabe recordar el virtual colapso del sistema de transporte que en los ferrocarriles alcanzó proporciones cercanas al caos ante la afluencia externa de granos, materias primas, maquinaria, bienes de consumo, etcétera. Curiosamente, todo parece indicar que el colapso del sistema de transporte tuvo una de sus causas principales en la ausencia de planeación de las compras externas e internas del sector paraestatal.

Asimismo, parece haberse presentado una escasez relativa de fuerza de trabajo calificada. En 1980 el empleo creció a la cifra récord de 6.3% y más de un millón de nuevos puestos de trabajo se abrieron en las distintas ramas y sectores de la economía;

³ Frase contenida en el PGD y reiterada por David Ibarra M., secretario de Hacienda, al comparecer ante la Cámara de Diputados en noviembre de 1980.

sólo en la industria de la construcción el empleo creció en 12.7% y en el transporte en 16.3 por ciento. El gobierno se ufana de estas cifras, mostrándolas como la mejor prueba de que el esquema de crecimiento adoptado era capaz de hacer avanzar a la economía distribuyendo simultáneamente el ingreso, por la vía del empleo. Lo cierto es que en esos años la concentración del ingreso se hizo más aguda, como lo demuestran los datos de la participación de las remuneraciones al trabajo en el PIB.

En el frente externo la situación se complicó por la caída en términos reales de las exportaciones no petroleras,⁴ en 1.7%, y por el aumento en la tasa de interés en el mercado internacional que elevó el servicio de la deuda externa.

En el sector agrícola, las zonas temporaleras se encontraban abandonadas a su suerte desde 1976, de tal manera que en 1979 fue necesario importar más de doce millones de toneladas de granos básicos. Como resultado de tal hecho, y del fracaso de quienes pretendieron encontrar la solución a través de la entrada de México al GATT, el gobierno federal puso en marcha en 1980 el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) por medio del cual se canalizaron grandes recursos a la producción agrícola. Gracias a ello y a las buenas condiciones climáticas, en 1980 la agricultura pudo crecer al 10%, lo cual, si bien permitió al país recuperar la autosuficiencia en algunos granos básicos, complicó aún más la situación en materia de almacenamiento y transporte.

Sin embargo, el mayor esfuerzo de gasto estatal dependía de manera casi exclusiva para su sostenimiento de los recursos del petróleo; o sea que la posibilidad de expandir el gasto público estaba en función directa del crecimiento de la renta petrolera que llegaba al Estado vía impuestos a PEMEX. Cuando los recursos petroleros no fueron ya suficientes para ello, se recurrió al aumento del crédito externo, que en 1980 alcanzó la suma de 4 055 millones de dólares.

En síntesis, hacia finales de 1980 la onda expansiva generada por el sector petrolero parecía haber entrado en su fase de agotamiento, lo que en las condiciones descritas significaba la imperiosa necesidad de encontrar una nueva fuente de dinamismo que, apoyada en el petróleo, fuese capaz de sostener el ritmo de crecimiento, propiciando al mismo tiempo una diversificación de la estructura económica interna y de sus relaciones con el exterior capaz de otorgar una salida al irresuelto problema del déficit externo y del déficit fiscal. Tal fue el cambio de estrategia que el gobierno federal intentó en 1981, con los objetivos centrales de dar una solución a los cuellos de botella,

⁴ En 1980 las exportaciones agropecuarias decrecieron 12.1% y las manufactureras 2.8 por ciento. Petróleo y gas crecieron 69.5 por ciento.

concentrando en ellos el esfuerzo del gasto estatal, encontrar nuevos polos de dinamismo que sustituyeran al petróleo y permitir un respiro a las extenuadas finanzas públicas.⁵

El supuesto básico del cual partía la viabilidad del cambio de estrategia era el mantenimiento del precio del petróleo en el mercado internacional (incluso no se descartaba una eventual alza) y del hecho de que en 1981 México alcanzaría el tope de exportación petrolera previsto por el gobierno, lo que daría al país un ingreso de divisas cercano a los 18 mil millones de dólares. El supuesto partía de un hecho risible: ¡la guerra entre Irán e Iraq!⁶

Para cumplir con sus objetivos, el gobierno dispuso para 1981 un crecimiento del gasto menor en términos reales al del año anterior, al tiempo que modificó la estructura de prioridades, colocando al frente a los sectores agropecuario y de comunicaciones, en tanto que el sector petrolero dejó de ser considerado, para fines del gasto, como sector prioritario. Se modificaron diversas disposiciones tributarias y de estímulos y subsidios, buscando reforzar la afluencia de inversión privada hacia nuevas ramas o hacia aquellas con problemas de oferta. Se dispuso la conclusión de las obras de PEMEX en la zona del Golfo de México para sustituir importaciones petroquímicas y se anunció un programa de racionalización de las compras estatales en el exterior. Los problemas de precios fueron atribuidos al exceso de demanda y se empezó a hablar del "sobrecalentamiento" de la economía.⁷ Para "enfriar" un poco la caldera, el gobierno restringió su gasto, aumentó la tasa de interés y dispuso el congelamiento de fondos bancarios prestables en el Banco Central.

A partir de abril de 1981 el panorama internacional empezó a hacerse más crítico; los países industrializados anunciaron reducciones en sus compras de crudo y el mercado de este producto se convirtió claramente en un mercado de vendedores. La OPEP no logró llegar a un acuerdo para reducir la producción y México siguió, al parecer, la estrategia de conservar compradores ofreciendo descuentos disfrazados en el precio de su crudo. Simultáneamente, el gobierno de Reagan propició una nueva subida en las tasas de interés en el mercado financiero estadounidense, con el consecuente impacto sobre el servicio de la deuda exterior mexicana.

En tales circunstancias, lo que se imponía era la adopción de medidas rápidas que

5 Para una exposición detallada del plan gubernamental, véase la *Exposición de motivos* de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1981. SPP-SHCP, 1980.

6 Véase *Informe de labores* de PEMEX, p. 2, marzo de 1981.

7 Al respecto véase la refutación a esta tesis de Eatwell y Sing en *Economía Mexicana*, n. 4, CIDE, México, 1982.

permitieran defender a la economía mexicana de los efectos que tendría la ya inevitable caída en el precio del crudo, máxime que desde el mes de febrero de 1981 la dolarización del sistema financiero y la fuga de capitales al exterior habían arreciado, hechos denunciados con toda oportunidad por diversas voces.⁸ En particular, se debería haber adoptado el control de cambios, así fuese parcial, el control del comercio exterior y del sistema bancario, principal vía de salida de los capitales que se fugaban a los Estados Unidos. Nada se hizo.

Los primeros días de junio de 1982 el periódico norteamericano *The Wall Street Journal* dio la noticia de que PEMEX había decidido bajar el precio del crudo mexicano en cuatro dólares promedio por barril; con esta decisión se precipitó la caída del precio en el mercado internacional, al tiempo que, en lo que parece haber sido un *tour de force* en el gabinete económico del gobierno de López Portillo, el director de PEMEX, Jorge Díaz Serrano, se vio obligado a presentar su renuncia.⁹ En los días siguientes la expectativa sobre la inminente devaluación del peso se tradujo en la compra masiva de dólares, la conversión acelerada de cuentas bancarias de pesos a dólares, la exacerbación de la fuga de capitales. El gobierno sostuvo, sin embargo, que la situación no era de emergencia y que la economía mexicana sería capaz de resistir la prueba; las medidas adoptadas se limitaron a una reducción del 4% en el gasto público, la readopción del sistema de permiso previo en algunas importaciones y la puesta en práctica de ajustes en el programa de inversión de PEMEX. Fuera de esas inocuas medidas, nada se hizo. La crisis había estallado sin que al parecer nadie en el gobierno se diera cabal cuenta de ello. Como un globo inflado a su máxima capacidad, la caída en los precios del petróleo fue como la aguja que desinfló todos los sueños de prosperidad por dos décadas que apenas un año antes el PGD había pronosticado. La crisis pasó así a ser el fenómeno central de la vida de México, y la incapacidad gubernamental para hacerle frente sería, a su vez, el símbolo más patético del agotamiento de la estrategia de crecimiento petrolizado.

LA RUTA DE LA DEBACLE

A diferencia de otras situaciones de crisis económica, en particular la de 1975-1977, la

8 Véase al respecto el discurso de Arnoldo Martínez V., candidato presidencial del PSUM, en Jalapa, febrero de 1982, en *El proyecto socialista*, ed. del CC del PSUM, México, 1983.

9 La debacle de Díaz Serrano concluiría en 1983 con su encarcelamiento por fraude en contra de PEMEX.

crisis actual no se fue procesando en el transcurrir de la acumulación de las contradicciones que distinguen al capitalismo mexicano. Tampoco puede sostenerse con evidencia empírica que se trate de una crisis de realización o de sobreproducción. Aunque lo más probable es que la composición orgánica del capital haya aumentado significativamente como producto del fuerte proceso de inversión vivido de 1978 a 1981, no puede decirse con certeza que la tasa de ganancia haya tendido a decrecer, ya que la productividad del trabajo creció a tasas apreciables en esos años y la inflación fue siempre un mecanismo de defensa de las ganancias.

Lo anterior no significa, desde luego, que las contradicciones principales, o siquiera las secundarias, del capitalismo mexicano habiesen sido superadas. Lo que sugerimos es que gracias a los recursos del petróleo esos problemas, los nudos críticos de nuestra economía, pudieron ser obviados. Por ello mismo, al caer el precio del petróleo su efecto interno se magnificó, tanto en el funcionamiento real del aparato económico, como en las expectativas de los agentes sociales. En otras palabras, lo que sugerimos es que la caída en el precio del petróleo no hubiese tenido el efecto desastroso que tuvo de no haber sido por la puesta en acto de una nueva racionalidad de la burguesía, en especial de su capa monopólico-financiera: la racionalidad de la especulación como medio fundamental de hacer frente a la nueva situación. Ante esa conducta, el gobierno vio inutilizados sus instrumentos tradicionales de política económica.

La burguesía "moderna" y "eficiente" que el proyecto lopezportillista se había ufano en formar y apoyar, la que construiría grandes empresas y haría de México una nueva potencia económica, mostró su verdadero espíritu de rapiña y afán de ganancia fácil; el espíritu de tendero predominó sobre la mentalidad capitalista y el mejor negocio pasó a ser la compra de dólares y su fuga al exterior. También en esto el proyecto estatal mostró su incapacidad; recordemos que desde 1977 se habló mucho de la "modernización" que México requería, de la necesidad de colocar al país en la ruta que le permitiría llegar al año 2000 con sus problemas básicos resueltos y con una nueva presencia en el mercado mundial. Para ello, la burguesía recibió todo el apoyo del gobierno, no sólo en materia de estímulos y subsidios, o de los precios de bienes y servicios que las empresas estatales les suministraban, sino también mediante múltiples reformas legales y económicas que abrieron el paso a la constitución plena de nuevas formas de organización operativa para asegurar el desarrollo del capital monopólico-financiero. La creación de las empresas controladoras, el surgimiento de la banca

múltiple,¹⁰ las nuevas formas de coinversión con el capital extranjero, la entrada de tecnología y maquinaria del exterior, el aval del gobierno mexicano para la deuda exterior privada, son sólo algunas de las formas concretas que adoptó la ilusión gubernamental de contar para México con una burguesía moderna y eficiente, capaz de imprimir al país una nueva faz y dotarlo del aparato productivo que relevara al petróleo como punta de lanza del crecimiento económico.

De julio a diciembre el gobierno intentó parar la especulación en contra de él pero solamente con un par de medidas que resultaron por completo contraproducentes: primero aumentó de nueva cuenta la tasa de interés para depósitos en moneda nacional, en condiciones de expectativa devaluatoria exacerbada, ello no tuvo prácticamente ningún efecto sobre la estructura de la captación. En julio de 1981, del total de la captación de la banca un 70.6% se realizaba en pesos y el resto en dólares, para diciembre del mismo año, la estructura había pasado al 65% en moneda nacional y 35%, en dólares. La cuantía de la fuga de capitales sólo se sabría un año después. La segunda medida, quizá la más costosa de todas las tomadas en esos meses, fue la de apoyar sin límite alguno al mercado cambiario. Para ello fue necesario contratar en el exterior deuda adicional por alrededor de 20 mil millones de dólares, casi la mitad a corto plazo y a las tasas de interés más altas de la historia de la deuda pública mexicana. Sumados a los 14 mil millones de dólares que ingresaron por la venta del petróleo, tenemos una cifra de 34 mil millones de dólares ingresados al país en un solo año. El déficit en cuenta corriente de balanza de pagos, en 1981, fue de 12 544 millones de dólares, los pagos por el servicio de la deuda 10 282 millones de dólares lo que da un remanente de 11 174 millones de dólares, considerando que en el mes de febrero de 1982 las reservas internacionales primarias del Banco de México no excedían de quinientos millones de dólares, podemos tener una idea aproximada del monto de divisas sacadas del país o en poder de particulares dentro del territorio nacional.

La cuantiosa inyección de divisas a un mercado dominado por la especulación no hizo sino reforzar ésta; contrariamente al efecto buscado por el gobierno, lo que ocurrió no fue la estabilización de la demanda de dólares, sino su mayor acentuamiento. Adicionalmente, miles de millones de pesos fueron convertidos a dólares sin que existieran físicamente; esto es, por una simple conversión numérica, depósitos originalmente efectuados en pesos eran documentados en dólares, o depósitos nuevos en

10 Véase al respecto "El dominio del capital financiero", en *Economía petrolizada*, Taller de Coyuntura de la DEP, Fac. de Economía, UNAM, México, 1981.

pesos eran registrados en dólares, ¡todo en nombre de la sacrosanta libertad cambiaria!

Todavía en noviembre de 1981 el gobierno se negaba a reconocer la gravedad de la crisis, hablaba de un ajuste pasajero y seguía sosteniendo que las condiciones esenciales del crecimiento económico del país permanecían inalteradas.¹¹ Se fortaleció la tesis de un pretendido sobrecalentamiento de la economía, y se reconoció explícitamente la necesidad de aminorar el ritmo de crecimiento con el objeto de dar oportunidad a la moderación de las inversiones y al ajuste intersectorial. Nuevamente el diagnóstico era equivocado; para esos meses los problemas centrales ya no eran de incompatibilidades en los ritmos de crecimiento de la oferta interna o de maduración de las inversiones; lo central de la crisis se había desplazado al sistema financiero, talón de Aquiles de la economía mexicana y reducto de poder de la gran burguesía, que desde ahí determinó la evolución de la crisis y su carácter catastrófico.

La dura realidad se impuso por sobre la ceguera gubernamental. El presupuesto para 1982 fue drásticamente contraído en comparación con el ejercido en 1981. Programas completos de inversión fueron suspendidos; se suprimió también la apertura de nuevas plazas en el sector público, se redujo el gasto en educación, salud y vivienda, y el programa SAM fue también objeto del recorte presupuestal. En plena crisis el gobierno intentaba maniobrar por el lado del gasto con la pretensión de lograr una recesión programada por el lado de la demanda que redujera el ritmo de crecimiento económico y permitiera un respiro a las extenuadas finanzas estatales. Nada funcionó; uno tras otro se desmoronaron los viejos instrumentos de política económica.

El 5 de febrero, en un discurso cargado de presagios, el presidente López Portillo habló con vehemencia de la difícil situación, denunció la especulación contra el peso y ofreció defender a éste "como perro"¹² ... pero nada hizo. El 18 de febrero de 1982, en una conferencia conjunta, el secretario de Hacienda y el director del Banco de México anunciaron por fin la devaluación del peso y el "retiro" del Banco de México del mercado cambiario, con lo cual la paridad del peso pasó a ser determinada "por la oferta y la demanda" de dólares; asimismo reiteraron que no habría control de cambios y dieron a conocer un programa de emergencia de ocho puntos, cuya medida fundamental era una nueva reducción del presupuesto estatal y la cancelación de más proyectos de inversión, incluso de algunos ya avanzados. A fines de febrero, David Ibarra y Gustavo

11 Véase al respecto la *Exposición de motivos* al presupuesto de egresos y a la Ley de Ingresos de la Federación para 1982, SPP-SHCP, México, 1981 y el texto de las comparecencias de los secretarios de Hacienda y Programación y Presupuesto ante la Cámara de Diputados. Diario de los Debates, LI Legislatura, 3er. periodo ordinario de sesiones.

12 *El Universal*, 6 de febrero de 1982.

Romero Kolbeck renunciaron a sus cargos y su lugar lo ocuparon dos personajes preclaros del monetarismo autóctono: Jesús Silva Herzog Jr. y Miguel Mancera A. La crisis había entrado en la fase de su difusión y encadenamiento a todo el aparato productivo.

LOS MESES DE LA IMPOTENCIA

Hemos seguido hasta aquí el curso de los principales acontecimientos vividos desde julio de 1981 hasta el momento de la primera devaluación de 1982. Hasta el 31 de agosto de 1982, la situación económica del país se caracterizó por la continuada profundización de la crisis, expresada por la agudización de los fenómenos especulativos en la órbita financiera; por la progresiva pérdida de dinamismo del aparato productivo; por el agudo deterioro de las relaciones económicas con el exterior, acentuado por el virtual cierre de los canales de crédito externo; por el disparo de la inflación y por la pérdida casi total de control sobre la situación económica por parte del gobierno. Se entró así a un periodo de ausencia de autoridad sobre el curso de la economía; ésta parecía ir dando tumbos en la única dirección posible: la de la caída en picada del producto y del rompimiento de los flujos "normales" entre los diversos sectores.

Quizá nunca antes un gobierno posrevolucionario había enfrentado tal situación de impotencia y desprestigio. Si el gobierno ofrecía una medida, ocurría exactamente lo contrario; así, la credibilidad del discurso estatal se volvió punto menos que nula. El descontrol gubernamental se reflejó con toda crudeza cuando el nuevo secretario de Hacienda en su primera conferencia de prensa negó con vehemencia la gravedad de la crisis y calificó a la situación como un "simple problema de caja", que sería resuelto en cuanto se recobrara para el país la liquidez de divisas que el funcionamiento económico requería.

Es probable que la razón de fondo de esa situación catastrófica, frente a la cual la política económica nada podía hacer, radicara en los propios cambios operados en la base productiva y financiera del capitalismo mexicano y en las transformaciones operadas en los agentes sociales de ese capitalismo, de forma tal que las medidas gubernamentales estaban condenadas de antemano al fracaso, pues no correspondían a la nueva situación. En otras palabras, el gobierno enfrentó los problemas de la década de los años ochenta con instrumentos de política económica creados en los años sesenta.

En su base productiva, el capitalismo mexicano, pese a sus limitaciones y deficiencias estructurales, sufrió un profundo proceso de transformación a lo largo de las últimas dos décadas. La industria se desarrolló y consolidó como el núcleo de la acumulación interna, nuevas ramas fueron creadas, otras se ampliaron y modernizaron. También avanzó la centralización del capital; la presencia del capital extranjero se difundió a nuevas ramas y tomó nuevas formas en su asociación con la burguesía local. La clase obrera creció en cantidad y aumentó su nivel de calificación; una nueva generación de obreros, cuyos padres habían sido, o eran, obreros, entró en acción; las viejas formas de control sindical, si bien siguieron predominando, fueron incapaces de instalarse en algunas de las ramas más avanzadas, como es el caso de la industria automotriz y nuclear, o de secciones completas de la industria minero-metalúrgica. El sindicalismo universitario consolidó su presencia como destacamento del sindicalismo democrático. La urbanización del país dio a éste una nueva faceta.

La burguesía, por su parte, también experimentó cambios; en su seno se consolidó como fracción hegemónica la capa monopólico-financiera que apoyó su desarrollo en la propiedad centralizada de grandes empresas industriales, comerciales y de servicios, articulados en torno a una institución bancaria. Surgieron así los grandes grupos industria-financieros que se colocaron como polo ordenador de la acumulación de capital en su conjunto.¹³ Algunos autores han pretendido desechar la tesis del desarrollo en México de una burguesía financiera con capacidad real de dominio, sugiriendo por el contrario que las características fundamentales de la acumulación de capital en México se encuentran determinadas por el sector estatal y por las empresas transnacionales.¹⁴ Esta tesis, a nuestro juicio parcial, parte de la comparación de acervos y valor de producción, sin considerar flujos financieros, tipo de mercancía producida y rama de la producción en que se ubican los grupos industrial-financieros, con lo cual quedaría claro que la capacidad de decisión de tales grupos sobre el conjunto de la acumulación de capital se funda en el lugar estratégico que ocupan en la producción y en su incidencia sobre el ritmo de inversión privada; a lo cual hay que añadir su evidente vinculación con el capital transnacional y con las propias empresas paraestatales, amén de su acrecentada influencia ideológica y política sobre el conjunto de la burguesía.

En particular, es menester destacar la enorme influencia que sobre la marcha de la economía adquirió la banca privada, que en todo este periodo actuó como articuladora

13 Cf. El dominio del capital financiero, op. cit.

14 Cf. E. Jacobs, "Los grupos privados de capital nacional en México", *Economía Mexicana*, n. 3, CIDE, México, 1981.

de los intereses de la gran burguesía y como gran centro de decisiones sobre el destino de los flujos de capital-dinero. Tal influencia se reveló con toda su fuerza cuando desde la propia banca privada se impuso la dinámica de la especulación monetaria y de la protección de la rentabilidad del capital de préstamo, por encima de las condiciones de reproducción del capital industrial.

Frente a estos cambios, que tenían su correlato en la esfera misma de la producción y de las relaciones económicas internas y con el exterior, el gobierno fue incapaz de hacer frente a una crisis de la magnitud de la que vive México desde mediados de 1981. El arsenal de política económica del Estado mexicano, diseñado para situaciones de crecimiento con estabilidad de precios y monetaria, pudo subsistir en el auge no por su eficacia, sino porque había en la escena un nuevo elemento: el petróleo. Cuando la situación cambió, la política económica entró también en crisis.¹⁵

No cabe duda que el principal factor de propagación y profundización de la crisis fue el sector financiero; desde él se magnificó el efecto de la caída de los precios del petróleo al provocarse la estampida de capitales al exterior y la dolarización del ahorro interno. Igualmente, la política de protección de dicho sector lesionó severamente al capital industrial, en particular al no vinculado a las instituciones de crédito, al aumentar de manera exagerada los costos financieros de las empresas, muchas de las cuales habían recurrido de manera excesiva al crédito bancario en la fase del auge petrolero, y al desalentar o hacer prohibitivos nuevos proyectos de inversión ya fuera por el costo financiero que imponía su realización, o bien por la desventaja implícita en la propia tasa de interés ante la tasa de ganancia industrial.

Por otro lado, si bien el gobierno insistió reiteradamente en la necesidad de impedir que la situación financiera lesionara al aparato productivo, lo cierto es que la política de recesión inducida aplicada en 1982 tuvo el efecto que se afirmaba no desear. La brusca contracción de la demanda interna, motivada por la reducción del gasto público, la pérdida de poder adquisitivo del salario ante el avance de la inflación, y la brusca contracción de la inversión y el consumo privados, redujeron las posibilidades de realización de la producción; ésta se contrajo y se despidió fuerza de trabajo (lo que redujo aún más la demanda interna), creándose así el círculo perverso de la recesión con inflación, ya que en condiciones oligopólicas, las grandes empresas reaccionaron protegiendo sus ganancias mediante el alza de precios y procurando maximizar su rentabilidad aplicando sus recursos líquidos a la especulación.

15 Cf. Alvater, E. "Política económica y crisis", en *Cuadernos Políticos*, n. 22, México, 1979.

La descomposición de los circuitos financieros terminó subordinando a su lógica al conjunto de la dinámica económica. Lo fundamental ya no era cómo producir más, sino cómo ganar más con menor producción. Se produjo así la situación de pesadilla que Marx intuyó en el volumen III de *El Capital* cuando anticipó la eventual autonomización del capital de préstamo y la apariencia de éste como un capital que se autovaloriza al margen de la producción y el intercambio de mercancías.

Las cifras agregadas dan cuenta de la brutalidad de la crisis. En 1982, por vez primera en más de cuarenta años, el PIB decreció en 0.2%, el empleo se redujo en 0.8%. La demanda global cayó -5.8%, resaltando la caída en la formación bruta de capital fijo que decreció en -16.8%, con especial impacto en maquinaria y equipo que cayó en 30.5% y en el componente importado que decreció 51.2%. Así, la inversión pública decreció en 12.7% y la privada en 20 por ciento. La importación total de bienes y servicios fue 41% menor a la de un año antes.

En la producción, de nueve grandes sectores, cinco presentaron tasas de crecimiento negativas, destacando la caída en la industria manufacturera (-2.4%) y en el transporte (-2.3%). El sector agropecuario, que un año antes había crecido en 6.1%, en 1982 cayó en 0.4%. En la industria manufacturera la caída más drástica se dio en la producción de maquinaria y equipo (-12.8%) y en las industrias metálicas básicas (-8.2%). En otros la caída fue amortiguada por la variación en existencias, de forma tal que el efecto de la crisis se postergó hasta 1983.¹⁶

Sería difícil encontrar otro caso en el cual una economía que apenas un año antes creció al 7.9%, en sólo doce meses acumulara tal cantidad de contradicciones y problemas como para presentar una contracción absoluta en prácticamente todos los sectores y ramas.

Al producirse la devaluación de febrero, el gobierno volvió a insistir en la manida tesis de que gracias al efecto devaluatorio, sería posible acrecentar las exportaciones manufactureras, de forma tal que el impulso de demanda perdido por la contracción del gasto público fuese compensado con demanda externa, la que simultáneamente permitiría un alivio, así fuese parcial, al deterioro de la balanza comercial. Lo cierto es que por enésima vez operó el círculo perverso que encadena la devaluación al disparo de las presiones inflacionarias internas, agravadas éstas por el aumento de las tasas de

¹⁶ En 1981 la variación de existencias registrada dentro de la demanda global ascendió de 46 354.6 millones de pesos de 1970; para 1982 se redujo a sólo 8 127.7 millones, pasando así del 4.4% de la demanda global en 1981 a sólo un 0.8% en 1982.

interés, lo que produjo que en un lapso de pocas semanas las supuestas ventajas para la exportación se esfumasen. Las exportaciones no petroleras crecieron en apenas un 3.7%, lo que las ubicó en un valor un poco superior a las realizadas en 1980.

La crisis produjo también efectos devastadores en algunos grupos monopólicos que habían recurrido en exceso al crédito externo, confiando en que los recursos petroleros garantizarían la estabilidad cambiaria y la disponibilidad de divisas. El caso extremo fue, desde luego, el del poderoso Grupo Alfa de Monterrey, que a lo largo de cuatro años fue presentado como el máximo logro del México "moderno". En noviembre de 1981, ante la súbita alza en las tasas de interés del mercado norteamericano, el Grupo Alfa se vio precisado a solicitar el apoyo financiero del gobierno a fin de evitar la suspensión del pago de su deuda externa. El apoyo le fue otorgado a través de un crédito de 15 mil millones de pesos por conducto de BANOBRAS. Sin embargo, la situación financiera de Alfa era ya insostenible; la puntilla se la dio la devaluación de febrero, que aumentó en casi el doble su deuda externa valorizada en pesos y el correspondiente servicio por pago de intereses. Pese a esfuerzos de todo tipo, Alfa no tuvo otro remedio que buscar la renegociación de su deuda con los acreedores del extranjero, lo que logró al costo de entregarles prácticamente la dirección del Grupo y del desmantelamiento de su otrora poderosa red de empresas subsidiarias, que en 1981 había alcanzado más de 250 empresas. Otros grupos también se vieron afectados, como el caso de Ponderosa Industrial (Comermex-Chihuahua) o VISA de Monterrey, pero lograron resistir el impacto de la devaluación gracias a una menor deuda externa o bien a haberse protegido previamente anticipando el pago de sus deudas. No obstante, puede afirmarse que no pocas empresas de gran tamaño se vieron seriamente afectadas por el efecto combinado de la subida de las tasas de interés externas e internas y la devaluación del peso. El efecto más fuerte se dio, como es obvio, en las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales debieron declararse en quiebra o fueron vendidas.

La reacción de la burguesía, en especial de su capa monopólico-financiera, fue primero defensiva; quienes tenían liquidez monetaria la convirtieron rápidamente a moneda extranjera, paralizando las inversiones y entregándose al rentismo. Esto fue posible no sólo por la tozudez del gobierno en mantener la libre convertibilidad del peso y el libre flujo de capitales con el exterior, sino también porque la política de tasas de interés, una vez demostrado que no era suficiente para mantener los pasivos bancarios en moneda nacional, se dirigió hacia la misma senda que en 1976 dio la puntilla a la estructura de los pasivos bancarios: el Banco de México autorizó la elevación de la tasa

de interés para los depósitos en dólares, con lo que la rentabilidad de esos depósitos, sumada al efecto de la minidevaluación diaria del peso, alcanzó la rentabilidad de los depósitos en pesos. Pese a ello, los dólares no permanecieron en el país; quienes los pudieron enviar al extranjero, no dudaron un momento en hacerlo.

Al mismo tiempo, a partir de febrero, la gran burguesía inició el consabido manejo publicitario, al que ya había recurrido cinco años antes, desplegando una fuerte campaña en la cual se responsabilizaba al gobierno de la situación. En particular, se criticó duramente la política, de gasto público y el aumento salarial de emergencia; la tesis de que el aumento del gasto público originaba la expansión monetaria y los aumentos salariales eran la fuente del alza de costos, sirvió para explicar el desbocamiento de la inflación. Se ocultó así la verdadera fuente de las presiones inflacionarias y la responsabilidad de la gran burguesía en tal situación. Nuevamente el gobierno se venía enfrentando a la campaña de descrédito y rumores, cuya intención no era otra que preparar el terreno de las negociaciones con el próximo régimen.

Para julio de 1982 la situación era ya la más crítica vivida por México en varias décadas. La fuga de capitales no paraba, los depósitos en dólares en la banca privada y mixta representaban más del 75% del flujo de captación total y habían superado el 50% de los pasivos bancarios totales. La inflación había superado en sólo seis meses el 45% y la crisis fiscal del Estado se desplegaba en toda su magnitud, ya que las divisas que se recibían por la venta del petróleo apenas si alcanzaban para hacer frente al servicio de la deuda externa y a un mercado cambiario metido en una "trampa de liquidez dolarizada". Los ingresos corrientes por concepto de impuestos a la renta, la producción y el consumo se desplomaron; pese al drástico recorte presupuestal, el déficit fiscal como proporción del PIB habría de llegar en 1982 a más del 16 por ciento. Si bien las importaciones cayeron drásticamente, el problema central de las relaciones económicas con el exterior ya no se encontraba en la esfera comercial, sino en la esfera financiera; el servicio de la deuda y la fuga de capitales desangraban a la economía en una proporción sin precedentes.

A partir de ese mismo mes, las declaraciones gubernamentales cesaron casi por completo, dando la apariencia de que el gobierno ya no sólo no sabía qué hacer, sino incluso que no sabía qué decir. Interrogado por los reporteros, el presidente de la República dijo, a mediados de agosto, que lo que tenía que decir lo diría en su sexto y último informe de gobierno.

El 12 de agosto, incapacitado para seguir sosteniendo el mercado cambiario,¹⁷ el gobierno anunció que el Banco de México se retiraba nuevamente del mercado cambiario, y que a partir de esa fecha no compensaría las operaciones en moneda extranjera que realizara la banca privada. Se estableció así el primer control de cambios de la historia económica poscardenista de México. Las divisas captadas por el Estado quedaban sujetas a control y se asignarían de acuerdo a un programa de prioridades determinado por la SHCP. Las operaciones no sujetas a control deberían realizarse en el "mercado libre" a la tasa de cambio que fijara el mercado.

Este sistema duró apenas diez días; había dejado fuera un problema capital: los depósitos en dólares en la banca privada y mixta, que de acuerdo con la ley eran garantizados por el Banco de México. Esos depósitos, alrededor de 12 mil millones de dólares, podían solicitarse en retiro al momento de su vencimiento o a la vista, según fuera el caso. Se corría así el riesgo de colocar al Banco de México en una situación de insolvencia y originar un pánico financiero de dimensiones catastróficas. Las primeras señales de riesgo se produjeron de inmediato: los contratos de depósito que vencían por esos días no eran renovados, los cuentahabientes exigían la devolución de sus depósitos en dólares.

El 24 de agosto el gobierno adoptó una nueva medida: decretó la conversión de todos los depósitos en dólares a moneda nacional, creando los llamados "mex-dólares", y prohibió la documentación de operaciones bancarias dentro del territorio nacional en moneda extranjera, valiéndose de una antigua disposición, nunca aplicada, del artículo 8º. de la Ley Monetaria. La burguesía respondió calificando tal medida como un fraude y solicitando amparo en contra del decreto gubernamental. En los días siguientes se produjo una estampida de retiros de los bancos. Se difundió el rumor de que el gobierno incautaría los depósitos bancarios y las cajas de seguridad instaladas en ellos. Al igual que en 1976, el rumor sobre un golpe de Estado se difundía. Todo parece indicar que ninguna de estas medidas le fue consultada al ya entonces presidente electo de México; ello sirvió también para que la burguesía advirtiera que el nuevo gobierno, una vez en el poder, debería volver las cosas a la "normalidad". El 31 de agosto de 1982 la situación económica y política del país se encontraba al máximo de tensión. El día siguiente alcanzó su clímax.

17 En esos días se habló de que la reserva primaria de divisas del Banco de México no alcanzaba los 200 millones de dólares.

EL CARDENISMO DE ÚLTIMA HORA

Habiendo iniciado su gestión solicitando una "tregua" a la gran burguesía, López Portillo llegaba al fin de su mandato en abierto enfrentamiento con ese mismo sector de la clase dominante a la cual había procurado en los cuatro años precedentes todo el estímulo y apoyo gubernamental. Los orígenes del conflicto tenían que ver otra vez con el oportunismo rapaz de una burguesía que enfrentada a la crisis reaccionó aprovechándose de ella, saqueando al país y colocando a la economía mexicana en la peor situación de la historia del presente siglo. Está, por otro lado, la incapacidad gubernamental para hacer frente a la crisis y su temor a provocar una nueva "crisis de confianza". El gobierno intentó hasta el final resistir; demostrar que lo hecho en cuatro años era duradero y sólido; entregó a la gran burguesía hasta el último dólar disponible, para convencerla de la solidez de la política y de lo pasajero de la situación. Nada funcionó. Colocado en el extremo de la ingobernabilidad, sufriendo el mayor deterioro público, no sólo del gobierno, sino de la institución clave del sistema político mexicano, el poder Ejecutivo, el gobierno dejó a un lado la política económica y reaccionó con política a secas.

A decir verdad, nadie esperaba del Sexto Informe de López Portillo nada novedoso; a lo más se especulaba con la probable implantación del control generalizado de cambios: era el paso lógico a seguir después de las medidas de agosto, y poco importaba ya puesto que las divisas que podían haber sido sometidas a control hacía tiempo que se encontraban fuera de México.

Así, la decisión presidencial de nacionalizar la banca privada (con la excepción del City Bank y del Banco Obrero) cayó como verdadera bomba en los círculos políticos y económicos de México. Por el contrario, la medida fue tomada con extrema cautela por los círculos financieros internacionales, hecho que debe atribuirse a la ausencia de participación significativa de capital extranjero en la banca mexicana y a la exclusión del City Bank del decreto expropiatorio. No cabe duda que la nacionalización de la banca fue una medida audaz, inspirada en su momento final por la desesperación y la indignación del grupo gobernante —especialmente el propio López Portillo— ante la magnitud del saqueo llevado a cabo por la gran burguesía. Sería muy difícil sostener que la nacionalización de la banca obedeció a un programa económico mínimamente coherente destinado a hacer frente a la crisis; por lo demás un gobierno a sólo tres meses del fin de su mandato estaba en los hechos imposibilitado para pretender un programa

de tal naturaleza.

Las propias reacciones de diversos sectores políticos y sociales dan cuenta de la confusión generada por la medida nacionalizadora. Desde las sesudas "explicaciones" de grupos de la izquierda que atribuyeron la medida a los intereses últimos del capitalismo mexicano aliado al FMI y el imperialismo mundial (p. ej. *Punto Crítico*), hasta las relaciones de en desplegado aparecido en toda la prensa nacional, anunciaba la entrada de México "al socialismo", mostraban, en sus extremos, la perplejidad y la incompreensión ante los complejos mecanismos políticos que subyacen en la acción del Estado mexicano, un Estado que pareció impasible y débil ante el avance incontenible del gran capital, que aceptaba incluso el minado de sus bases de legitimidad histórica, pero que reaccionó a última hora con el recurso de los años del cardenismo. Sólo que ahora no se trataba de la expropiación del capital extranjero, sino de la afectación del grupo hegemónico del gran capital nativo.

La nacionalización abrió paso a un periodo de confrontación y redefinición en las relaciones entre el Estado y la clase dominante. La negociación para restañar las heridas y definir las nuevas bases del trato ha correspondido al gobierno de Miguel de la Madrid, en un proceso aún inconcluso y pendiente de un análisis de fondo.

Las repercusiones inmediatas de la nacionalización fueron, como ya hemos dicho, de índole política. El interregno abierto con la presencia de Carlos Tello M. en la dirección del Banco de México (sin S.A.) no rindió ningún fruto de largo alcance, y con el cambio de gobierno se restauró y consolidó la visión y práctica conservadoras en el terreno de la política económica. Políticamente la reacción de la burguesía tuvo un primer momento de extrema virulencia verbal, seguido de un despliegue propagandístico centrado en la realización de los foros denominados "México en la libertad", organizados por el Consejo Coordinador Empresarial. Ya durante el gobierno de Miguel de la Madrid, la gran burguesía ha seguido la táctica de negociar en el terreno económico, consolidando posiciones y buscando recuperar presencia en el ámbito financiero, en tanto que en el terreno político es clara la inclinación panista, en especial en el terreno electoral, de sectores importantes de la burguesía.

Los tres meses finales del sexenio de López Portillo fueron dominados por la parálisis de un gobierno que sólo esperaba la llegada del 10. de diciembre y por las giras presidenciales de despedida. Mientras tanto, la crisis seguía su dinámica implacable, la producción se paralizaba, el desempleo se generalizó y la inflación alcanzó niveles récord. Desde la sombra, el nuevo gobierno preparaba las bases de su programa de

emergencia; en noviembre se firmó el convenio de facilidad ampliada con el FMI, y se iniciaron las gestiones para la renegociación de la deuda externa. El cardenismo de última hora encontró su clímax y su declive en sólo unas horas: las que duró la lectura de ese sexto informe de gobierno que marcó de manera decisiva el curso inmediato de la vida de México.